

Estado y mercado: una combinación necesaria

Un experto en Economía analiza el trasfondo de una crisis interminable que ha cuestionado el sistema económico mundial. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora? ¿Es la solución profundizar en el liberalismo? ¿O más bien optar por más socialdemocracia?

COMO HA SEÑALADO RECIENTEMENTE el profesor **Miguel Alfonso Martínez-Echevarría**—primer decano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra— durante la clausura del curso 2013-14 del Colegio Mayor Belagua, la complejidad de la economía actual requiere un análisis profundo de las causas y efectos de las acciones y políticas económicas.

Ante tal complejidad, los economistas—y los que no lo son— se sienten a menudo tentados a dar explicaciones sencillas de los fenómenos contemporáneos. Un ejemplo es la crisis financiera de 2008. Para unos cuantos (por ejemplo, el documental *Inside Job*, que obtuvo el Óscar, entre ellos), se debe al mal funcionamiento de los mercados. En



ANTONIO MORENO

Profesor de Finanzas Internacionales de la Universidad de Navarra y doctor por Columbia University

particular, a los conflictos de interés de los mercados financieros. Para otros, como el economista y catedrático de Columbia University, **Xavier Sala i Martín**, es el resultado de incentivos perversos proporcionados por el Estado y los bancos centrales. Algunos, en cambio, defienden que se trata de un problema de regulación financiera (**Gerard Caprio, Jr.**, del Williams College).

Todas las visiones resultan válidas en parte. Sin embargo, consideradas en exclusiva ofrecen una imagen incompleta de una realidad que requiere ser entendida para evitar futuras crisis. **¿LA BELLA Y LA BESTIA?** El papel que el mercado y el Estado desempeñan en el desarrollo económico de los países es uno de los temas más controvertidos,



Ilustraciones de Pedro Perles

tanto en Política como en Economía. Aunque muchos duden sistemáticamente de las actuaciones del Estado, este puede proporcionar soluciones prácticas en escenarios difíciles. Desde el punto de vista del desarrollo económico, un papel proactivo puede estar justificado (**Dani Rodrik**, profesor de Harvard University, en su obra *The Globalization Paradox*). De hecho, el impulso público puede jugar un papel esencial en las etapas iniciales o más complejas del desarrollo económico de los Estados, como ha sucedido en los últimos sesenta años en España, la Alemania de posguerra o Corea del Sur. La inversión pública representa —junto con el acceso a los mercados— un elemento clave para explicar por qué tanta gente ha salido de la pobreza.

Sucede que en las etapas iniciales del desarrollo económico hay pocos puntos de apoyo para el crecimiento: el sector privado es pequeño, las instituciones no funcionan bien, existe inseguridad jurídica, y

bajo nivel educativo. Todo esto propicia fallos en los mercados e incluso que no existan. Es entonces cuando el Estado debe invertir con decisión en Educación y en sectores estratégicos que desarrollen el país. Al mismo tiempo, es necesario incentivar la maduración gradual de los mercados financieros para que aporten el capital necesario a los proyectos e ideas emergentes. En esta etapa, desarrollo económico y financiero tienen el potencial de reforzarse mutuamente, lo que justifica una intervención pública subsidiaria más proactiva. No significa que el Estado tenga una información perfecta de todo, pero ciertamente posee (o debería poseer) más visión de conjunto y la capacidad de llevar a cabo políticas que dirijan a los países hacia un desarrollo económico más capilar.

La respuesta a las crisis económicas proporciona otro escenario donde el papel del Estado —a través de políticas contracíclicas— puede ser muy beneficioso. Por ejemplo, la famosa Crisis de 1929, pero también

otras en las que falta demanda, mengua la oferta y los mercados necesitan impulsos exteriores para recobrar su dinamismo.

En países como España o Reino Unido la crisis actual ha generado un episodio de intervención pública sin precedentes a través de la recapitalización del sistema financiero —76 millones de dólares en el caso del Royal Bank of Scotland, el máximo desembolso hasta la fecha, y 29 millones de dólares en Bankia—.

Es un hecho que las burbujas en los mercados financieros e inmobiliarios existen, pero estos no se rebelan ante unos precios desorbitantes

Se podría argumentar que estas intervenciones se diseñaron para solventar los problemas creados por el mismo Estado. Por lo tanto, la solución podría venir con la reducción al mínimo del Estado y sus incentivos perversos. Así el bienestar social aumentaría. Pero una cosa es la teoría y otra, la cruda realidad, donde las imperfecciones de todo tipo —humanas, de mercado, informativas, estatales, empresariales o los excesos— hacen que cada cierto tiempo entremos en recesión, y de nuevo se requiera de la intervención estatal para impulsar la economía y redistribuir la riqueza. Es inevitable. No estamos en un mundo teórico, sino real, donde hay que minimizar los incentivos erróneos a conductas irresponsables dentro de las Administraciones públicas y, por otra parte, utilizar todas las herramientas disponibles para mitigar las situaciones de recesión y exclusión social.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido criticado con dureza por promover recetas globalizadoras neoliberales en todo el mundo. Los reproches fueron especialmente acertados tras las políticas que

recomendó durante la crisis asiática de 1997. En aquel caso, el FMI condicionó su ayuda al establecimiento de programas de ajuste fiscal tan rigurosos que depri- mieron aún más las economías nacionales.

Sin embargo, también ha sido encomiable el esfuerzo del Fondo Monetario por rectificar. De hecho, ha sido una de las pocas instituciones que creó una oficina de evaluaciones externas de sus políticas. En esa unidad se pueden criticar abierta y constructivamente las decisiones adoptadas. Fruto de esta apertura, el FMI cambió de posición respecto a la globalización financiera. En un comunicado histórico de 2012 justificó los controles de capital y aconsejó limitar las entradas y salidas de capital en ciertas situaciones.

Los propios economistas también estaban modificando su visión, de modo que el viraje del FMI significó la defensa de un desarrollo económico menos volátil. En síntesis, se reconoció explícitamente que más globalización no siempre es mejor.

De hecho, muchas de las crisis financieras internacionales desde los años ochenta (México 1994, Argentina 2001 o Islandia 2008) surgieron en un periodo de globalización creciente. Esto no significa que esa globalización sea mala *per se*, sino que debe acontecer cuando los países estén preparados para ello, con instituciones legales y políticas adecuadas, una regulación y supervisión apropiada y una gobernanza privada y pública honrada.

A pesar de que los mercados crean riqueza, a menudo no se autorregulan bien —por ejemplo, resulta llamativo que entre 2002 y 2007 Alemania y Grecia se financiaran al mismo tipo de interés a diez años—. Es un hecho que existen las burbujas en los mercados financieros e inmobiliarios, pero estos no sacan ni «tarjeta amarilla ni roja» ante los precios desorbitan-



tes. Como afirma **Bob Shiller**, Nobel de Economía en 2013, hay exuberancia irracional y muchas cosas más, pero los mercados guardan silencio. Cuando estos se desploman, la macroeconomía empeora rápidamente y millones de personas se empobrecen. Por eso se considera cada vez más importante que los responsables políticos estén atentos a la evolución de los mercados y que reaccionen convenientemente. Queda para el debate, muy vivo hoy, la conveniencia de intervenir, cuándo y cómo (cuestión planteada, entre otros, por el experto en ciclos económicos de la Universitat Pompeu Fabra, **Jordi Galí**; el ex presidente de la Reserva Federal **Ben Bernanke**; el profesor de New York University **Mark Gertler**; o el monetarista **Claudio Borio**, que ya en 2003 alertó sobre la fragilidad de los mercados financieros).

SOSPECHOSOS HABITUALES.

A pesar de lo dicho, muchas experiencias de actuaciones estatales recientes, y no tan recientes, dejan mucho que desear. Es inevitable: el Estado está compuesto por personas, que con una frecuencia alarmante se corrompen y no establecen políticas económicas orientadas al bien común. En otras ocasiones, las Administraciones públicas solo han pretendido aumentar su tamaño y su poder. Incluso fallan en sus políticas sin ser corruptos. Sencillamente, acertar no es fácil.

Una actuación pública nefasta contribuyó decisivamente al caos de la crisis actual. En Estados Unidos, tanto el Gobierno como la Reserva Federal alentaron el préstamo hipotecario. En España, los políticos saquearon las cajas de ahorro en connivencia con los gestores de esas entidades y de unos reguladores (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores...) que «miraron hacia otra parte». Es una lástima que instituciones tan impor-

tantes para el desarrollo de nuestro país, como las cajas de ahorro, se plegaran a los intereses de unos pocos... Al final, como en Estados Unidos, el exceso de crédito estalló en manos de los propietarios de nuevos inmuebles, los promotores, las constructoras y las inmobiliarias.

Parece que fue entonces cuando «descubrimos» el poder de las grandes empresas sobre los gobiernos (nacional, autonómico, municipal) y partidos políticos, a los que financian las campañas electorales. Como señala **Luigi Zingales**, economista de la University of Chicago, en su libro *A Capitalism for The People*, el Estado falla entonces en su papel de garante de la economía de mercado: ayuda a los gran-

¿No tiene el sistema una alternativa a políticas injustas y confiscatorias? ¿Quién emprenderá con tasas impositivas del 80 por ciento?

des a costa de los pequeños, legisla mal y destruye la igualdad de oportunidades, que es la base —junto con la libertad empresarial— del capitalismo. Incluso entorpece —cuando no impide— la movilidad social, imprescindible para la meritocracia en la que aspiramos a vivir. Es bien conocido que en muchas ocasiones se premia el «mérito» de la política en vez de la «política del mérito».

En ese escenario, los jóvenes empresarios y los trabajadores menos cualificados son quienes resultan más perjudicados. Por eso el Estado, consciente de ello, sobre todo en Europa, trata de consolarlos con subsidios que se convierten en «pan para hoy y hambre para mañana». ¿Por qué no deja el Estado actuar al mercado con unas reglas claras y estables? ¿Por qué no se castiga la corrupción como es debido,

para que la sociedad rectifique y aprenda de sus errores? En su cada vez más popular ensayo *El Capital del siglo XXI*, el economista **Thomas Piketty**, director de la prestigiosa École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, propone un impuesto global a la riqueza y a la renta, hasta del 80 por ciento en el caso de la renta los más ricos. ¿Objetivo? Reducir las crecientes desigualdades económicas dentro de los

Ha pasado el tiempo de preocuparse solo por la situación de «mi país» o «mi banco». El impacto en la Economía de lo bueno y lo malo que ocurre en el mundo es cada vez mayor

países. No importa que algunos estudios muestren que la desigualdad global ha caído en los últimos treinta años, sobre todo gracias a que decenas de millones de ciudadanos chinos e indios han salido —y salen— de la pobreza. A esta corriente económica, en la que además de **Piketty** se encuentran los premios Nobel **Paul Krugman** o **Joseph Stiglitz**, le preocupa principalmente que los privilegiados de los países avanzados (el infausto «Top 1%») ganen mucho más dinero que el 99 por ciento restante. De modo que el Estado «salvador» debe ajustar las cuentas.

Ante una política económica tan descabellada, cabe concluir que algo se ha perdido en el análisis de **Piketty**. No en el trabajo descriptivo del libro, extraordinario, sino en el diagnóstico ofrecido, según el cual el capitalismo provoca en sí mismo desigualdad relativa. **Piketty** defiende este argumento porque la renta del capital crece más rápidamente que la economía, así que la porción de tarta asociada al otro factor productivo (los salarios) mengua cada vez

más. «Los ricos son cada vez más ricos y los pobres, y la clase media, cada vez más pobres».

Nos encontramos, de nuevo, con la simplificación de un problema muy complejo. Primero en su planteamiento: ¿Por qué es tan perjudicial más desigualdad relativa? Después, en su resolución: ¿No hay otro remedio que elegir políticas confiscatorias? ¿Quién puede emprender un negocio con unas tasas imposi-

tivas del 80 por ciento? Como afirma **Edmund Phelps**, premio Nobel de Economía y profesor de Columbia University, la innovación y el emprendimiento resultan cruciales para la vitalidad de la economía. Por ese motivo unos impuestos confiscatorios desincentivan la creación de nuevas empresas y negocios.

HACIA UNA ECONOMÍA MEJOR. La abrupta crisis de 2008 ha hecho evidente la extraordinaria interdependencia que existe entre las entidades financieras. Al hundirse una de ellas, Lehman Brothers, muchas otras se vieron también arrastradas, de modo que hubo que establecer «diques de contención» para que el sistema financiero no se viera todavía más dañado. Esta interdependencia se ha vuelto inherente a la economía real (comercio) y financiera en la que vivimos. En Europa resulta especialmente cierto, con un ciclo económico cada vez más sincronizado entre los países.

De hecho, ahora que parece que España comienza a salir de la crisis, surgen nuevas amenazas por el débil crecimiento de países vecinos como Italia y Francia. Por otro lado, el Estado de Bienestar europeo no se sostiene con las actuales tasas de natalidad. De nuevo la interdependencia. Esta vez entre nuestra generación y las siguientes.

Queda patente que los problemas económicos ya no se resuelven solo con políticas nacionales, que además afectarán a generaciones futuras. Conocer y aceptar esta relación debería constituir el punto de partida de un nuevo proyecto europeo, que tanto necesitamos. Requerimos una Unión Europea con visión a largo plazo y de conjunto, no centrada en un solo país. En este sentido, la unión bancaria camina en la buena dirección.

También parecen acertadas las medidas que se dirigen al sistema financiero en su conjunto, no aisladamente a cada una de las instituciones. Se acabó la época de preocuparse solo por la situación de «mi banco» o de «mi país» porque la transmisión de lo bueno y lo malo es cada vez más rápida.

La economía debe proporcionar la posibilidad de trabajar y mejorar individual y familiarmente. El desarrollo económico lo posibilita, siempre que se creen empleos en los que las personas sean valoradas por sus méritos. Por ello debería hacerse más énfasis en la creación de oportunidades, y no tanto en la cuestión de la desigualdad de la renta. Es un hecho que la economía de mercado crea riqueza y empleos. En los últimos veinte años, a pesar de la crisis, la economía mundial ha crecido basándose en la tecnología y la especialización empresarial. Quienes no poseen esta capacitación quedan fuera de los mercados, sobre todo aquellos que no han cursado estudios superiores o de formación profesional.

Además, el Estado y el mercado necesitan de otras instituciones para facilitar el funcionamiento de la economía. Una de ellas es la familia, esencial para crear más y mejores oportunidades económicas especialmente entre los jóvenes, como subrayan los estudios sociológicos y de Economía laboral. El Estado, por su parte, debe abandonar su visión monopolista: «él» no es el único responsable de la justicia social, ni esta consiste únicamente en la redistribución de la riqueza. En cambio, es exigible que facilite el papel

de instituciones de la sociedad civil. Por ejemplo, las que promuevan la educación, las oportunidades y el bien común. Entre ellas, las de inspiración religiosa.

Financiación pública y gestión privada han de combinarse con más frecuencia para garantizar y mejorar servicios sociales clave, como la sanidad o la educación. Al fin y al cabo, al ciudadano no le importa tanto quién provea el servicio, sino que este sea de calidad. Hay que desterrar la sospecha mutua entre Estado, mercado y sociedad, de modo que la asignación de recursos sea más eficiente, lo que redundaría en una mayor movilidad social.

Cuando el Estado y el mercado se combinan gracias a personas virtuosas, a leyes y reglas claras y estables, se generan instituciones sólidas, se fomenta el crecimiento económico y nacen oportunidades para una gran mayoría. Entonces, las aparentes restricciones de los mercados dejan de serlo. ●

